



RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010037215 DEL 25/08/2014

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “*se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones*”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que “*La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior.*”

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de ARACATACA, del departamento del MAGDALENA, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios de acueducto y alcantarillado al 31 de diciembre de 2012, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010017855, del 29 de mayo de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de ARACATACA, departamento del MAGDALENA, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013:

A) Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994 mediante:

1. Invitación pública dirigida a empresas de servicios públicos para que presenten ofertas para la prestación de los servicios públicos (numeral 6.1) y a otros municipios, al Departamento, a la Nación y otras personas públicas o privadas, para organizar una empresa de servicios públicos (numeral 6.2).

2. Documento en que conste que se realizó la publicación de las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.
 3. Certificación en la que conste que no hubo empresas de servicios públicos o personas públicas o privadas interesadas en la prestación de los servicios ni en la organización de una empresa de servicios públicos en el municipio.
- B) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.
- C) Cumplimiento del 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI.
- D) Acta de concertación de puntos y lugares de muestreo en cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Resolución 811 del 5 de marzo de 2008 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible "por medio de la cual se reglamenta cómo las autoridades sanitarias y las personas prestadoras, concertadamente, definirán en su área de influencia, los lugares y puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en la red de distribución" o la que la modifique o sustituya.

En caso de no poder acreditar el criterio de la forma descrita, podrá reportar al SUI la solicitud suscrita por el municipio prestador directo y radicada ante la autoridad sanitaria competente, para la concertación de los lugares y puntos de muestreo sujetos de control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en la red de distribución.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010017855 del 29 de mayo de 2014

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010017855, del 29 de mayo de 2014, se envió citación al señor alcalde del municipio de ARACATACA, del departamento del MAGDALENA, mediante el oficio No. SSPD 20144010287151, del 29 de mayo de 2014, enviado por correo certificado el 5 de junio de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Transcurrido el término para que el representante legal del ente territorial compareciera a notificarse personalmente del contenido de la Resolución SSPD No. 20144010017855, sin que ello ocurriera, se procedió a enviar el respectivo aviso de notificación mediante el oficio No. SSPD 20144010321801, del 13 de junio de 2014. De acuerdo a la información remitida por la empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. este documento fue entregado el 24 de junio de 2014 en la Alcaldía Municipal, por lo tanto y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, la notificación se considera surtida al día siguiente de su entrega en el lugar de destino.

Ahora bien, el señor JAIRO DE JESÚS MEJÍA CUELLO, en su calidad de apoderado especial del alcalde del municipio de ARACATACA, del departamento del MAGDALENA, mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20145290364972, del 10 de julio de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010017855.

III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del C.P.A.C.A. establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el apoderado del alcalde del municipio de ARACATACA, del departamento del MAGDALENA, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20145290364972, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A., por lo tanto, se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"El Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo en ejercicio de sus atribuciones, conferidas en el Parágrafo del Artículo 4 de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8 del Decreto 1040 de 2012 y en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011, consideró que revisados todos y cada uno de los criterios adicionales para entidades territoriales prestadoras directas, establecidos en el artículo 5 del Decreto 1639 de 2013 encontró que el Municipio no reportó los documentos en el SUI que permitan determinar que agotó correctamente el procedimiento establecido en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 de la ley 142 de 1994, respecto de los servicios de Acueducto y Alcantarillado que prestó directamente al 31 de diciembre (sic) de 2012; así mismo, en cuanto a la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, se verificaba que el municipio no reportó al SUI el acto de aprobación de las tarifas para los servicios de acueducto y alcantarillado. De igual manera que al verificar el reporte de información al SUI, se constató que el municipio no reportó el porcentaje requerido de los formatos de tarifas aplicadas y facturación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para la vigencia 2012 y que igualmente referente al aspecto de cumplimiento de las normas de calidad del agua para el consumo humano, el ente territorial no reportó el acta de concertación de puntos y lugares de muestreo de conformidad con los lineamientos expedidos por el Gobierno Nacional sobre la materia ni la solicitud radicada ante la autoridad sanitaria competente con la propuesta de la concertación de los puntos y lugares de muestreo. Manifiesta entonces, que una vez analizados todos y cada uno de los aspectos y sus correspondientes criterios, se pudo determinar que el municipio de ARACATACA del Departamento del Magdalena no cumplió con los requisitos necesarios para que esta Superintendencia expida la certificación a que se refiere el Parágrafo del artículo 4 de la ley 1176 de 2007.

Por tales motivos, resolvió descertificar al Municipio de Aracataca (Magdalena), en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico.

Pues bien, vale la pena recordar al Señor Superintendente Delegado que es muy triste lo que ha venido aconteciendo en el municipio de Aracataca (Magdalena) con relación a la prestación del servicio público de acueducto, desde que se implementó el Plan Departamental de Aguas en la región. Si bien es cierto que dicho programa fue encausado para dar solución a las regiones y así mismo, dar agua potable a todos los municipios de nuestro país, este proyecto lastimosamente no se ha desarrollado como debe ser y la corrupción y el clientelismo ha hecho mella en él, llevando al traste la verdadera voluntad e intención del Gobierno Nacional de su política pública relacionada con este aspecto. Casos como el Carmen de Bolívar, Casanare, Guajira, entre otros, debemos incluir muy ciertamente a Aracataca, por mencionar uno de tantos municipios del Magdalena afectados por tales acciones inexactas, pues en la apuesta por un plan regional en donde se enmarcó el Regional Macondo, fueron muchos los municipios afectados por las incorrectas determinaciones del Plan Departamental de Aguas, entre ellos, Cerro de San Antonio, Ariguaní, Plato, Nueva Granada, etc. Pues bien, desde que la administración de gobierno del Alcalde TUFITH HATUM ARIAS, 2012/2015 dio inicio a sus actividades gubernamentales municipales, priorizó este tema en concreto, dándose en el año 2012 el abandono de la empresa que tenía la obligación contractual por concesión del servicio público de acueducto y alcantarillado, AGUAS REGIONAL MACONDO. Dicha empresa dejó tirado el servicio a estos municipios, procediendo estos a asumir una obligación, si bien es cierto, de una manera sorpresiva, pues ninguno de estos estaba preparado para asumir dicha carga, más cuando existía una empresa que prestaba el servicio tan irresponsable que no dejó información alguna para la continuidad de dicha prestación contratada.

Siguiendo el recorderis, el Municipio de Aracataca, en Junio 12 de 2013, en una de tantas comunicaciones, mediante Oficio No. 094 expuso al Señor DIEGO JAVIER OSORIO JIMÉNEZ, Coordinador Grupo Pequeños Prestadores (A) en ese entonces de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la problemática existente con relación a un asunto que tenían radicado bajo el No. 20135290209122; y aunque pareciere otro tema, lo que quiero evaluar y recalcar es el drama vivido por nuestro municipio ante la fatal eventualidad de irresponsabilidad de dicha empresa Aguas Regional Macondo; en dónde como hoy (sic) se le manifestaba que era de conocimiento notorio, que la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en el municipio de Aracataca, Plato, Nueva Granada, Cerro de San Antonio y Ariguaní se encontraba a cargo de la empresa AGUAS REGIONAL MACONDO S.A. E.S.P., operador que había sido contratado por AGUAS DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. y AGUAS DE MACONDO S.A. E.S.P. para dicho propósito, ya que el operador primario fue la empresa AGUAS KAPITAL MACONDO S.A.E.S.P., quien cedió dicho contrato al operador aludido.

AGUAS REGIONAL MACONDO S.A. E.S.P. hasta mediados del año pasado, mantuvo de alguna manera la prestación intermitente de dicho servicio, ya que la operación que ejercía se

hacía de manera inconstante, irregular, en fin con ineficiencia. Dicha operación fue abandonada por dicha empresa teniendo que, al menos en nuestro caso, particularmente, asumir directamente la operación dentro de un limbo administrativo, jurídico y financiero. Que La superintendencia de servicios públicos conoce con detalles dicha situación, ya que en muchas oportunidades, por no decir en todas, se delegaba a un funcionario de dicha entidad para las reuniones programadas en que se esbozaba y trataba la problemática existente de dicha operación en este municipio y en los demás integrantes del Regional Macondo. Así mismo, funcionarios del Viceministerio de Aguas acompañaban dichas reuniones.

Pues bien, ante el abandono de la prestación por parte de esta empresa nuestra administración tuvo que recurrir a figuras diversas para asumir directamente la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, y entre dificultades ha logrado seguir prestando de alguna manera dicho servicio.

Recordando el año pasado, cuando fue noticia nacional la inauguración del Acueducto de Aracataca, aún nuestro municipio atravesaba los ires y venires de las consecuencias nefastas del Plan Departamental de Aguas, dando con ello a una situación que fue importante para el desarrollo no sólo de nuestro municipio sino el de muchos más en el país, ya que con ello se dejó en evidencia la grave crisis de los diferentes Planes Departamentales de Agua y fue así cuando el mismo Gobierno Nacional decide poner punto final a muchas actuaciones de la Gerencia del Plan Departamental de Aguas del Magdalena con respecto a este tema y asume el control directamente para culminar las obras en el municipio. Desde ese entonces, hemos contado con el acompañamiento del Viceministerio de Aguas, y con la Doctora NATALIA TRUJILLO quien ha sido un apoyo invaluable en tal aspecto se han adelantado muchas acciones que no habían ocurrido antes del "destape" de nuestra realidad en lo que a esto se refiere.

Que el Municipio no reportó los documentos en el SUI que permitieran determinar que agotó correctamente el procedimiento establecido en nuestra legislación pertinente, es algo que simplemente debe valorarse desde el punto de vista de fecha de la asunción de la prestación del servicio correspondiente, pues este fue acogido en el mes de diciembre de dicho año; pero no tuvimos la suerte al momento del cargue de la información correspondiente, tal como lo manifesté al Doctor GIOVANNI BONILLA en algunas oportunidades de manera personal y otra en escrito de reconsideración en cuanto al tema de pequeños prestadores el año pasado, de obtener la asesoría y la guía correspondiente a pesar de haber hecho el esfuerzo para el cumplimiento de estas obligaciones, dejando constancia incluso ante la insistencia de nuestros funcionarios para contactar a las mesas o personal de apoyo señalados en la página correspondiente para guiar dicho cargue. Que no existe constancia, pues es algo que quiero que se valore desde un punto de vista eminentemente objetivo. Nada ganaría expresando en este escrito una mentira cuando lo que desea este municipio es dar solución a una problemática de años atrás.

En estos momentos estamos más preparados para cumplir las obligaciones correspondientes relacionadas a este tema, pues así como lo he manifestado ante el Doctor BONILLA nuestra misión es dejar huella sana en este territorio que ha sido maltratado por la mala aplicación de la política del plan Departamental de Aguas en el Magdalena. Sería doloroso premiar a quien le ha hecho daño al Municipio, pues el manejo de dichos recursos los tomaría y asumirla el Departamento, "Dueño y Amo" del Plan Departamental de Aguas. Ahora bien, en cuanto al punto dos señalado por usted en cuanto a la implementación y aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA, esta no se reportó por que el Municipio facturó únicamente el mes de diciembre del año 2012, y el sistema tarifario aplicado era el dejado por AGUAS REGIONAL MACONDO, lo que fue consultado a diferentes funcionarios conocedores del tema, del Ministerio, quienes dijeron que no había necesidad de implementar nosotros dichas tarifas. Entonces, con todo respeto, a quien le creemos, si consideramos que este tema es conocido por ellos y nos orientan en tal determinación en esa manera que podemos hacer?. Lo mismo, debemos expresar en cuanto al tercer punto señalado en las observaciones de dicha resolución. Por último, referente al aspecto de cumplimiento de las normas de calidad de agua para el consumo humano, se dice que el ente territorial no reportó el acta de concertación de puntos y lugares de muestreo; pero si queremos hacer claridad en que este tema fue manejado por la Gerencia del Plan Departamental de Aguas, en donde enviaban un formato al despacho del Señor Alcalde Municipal para esta información y jamás se recibía el retorno, creyendo que tal obligación era reportada por dicho ente.

Tal como lo manifesté anteriormente, es triste estar inmerso en un Plan Departamental de Aguas que no ha sido el más sano para nuestro municipio ni nuestra región. Yo exhorto a la Superintendencia para que haga un análisis cuidadoso de lo manifestado y considere con pertinencia todo lo expresado.

Sabremos dar cumplimiento a nuestras obligaciones de eso no le quepa la menor duda, pero Señor Superintendente acudimos a Usted, seguros de su análisis ante lo que hoy le manifiesto. No se puede premiar a quien nos ha hecho daño.

Quiero a título de pruebas se sirva usted indagar por todo el tema enunciado ante la misma Viceministra, quien dará fe de nuestro compromiso con el asunto, de neutros requerimientos, del apoyo recibido, en fin de lo que diligentemente hemos estado realizando."

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con el documento radicado con el No. SSPD 20145290364972, del 10 de julio de 2014, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se solicitó la siguiente prueba:

3.3.1. Indagar por los hechos enunciados en el recurso de reposición y por el compromiso que tiene el municipio para cumplir con los criterios señalados en el Decreto 1639 de 2013, ante la Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Pruebas decretadas de oficio

Al respecto el recurrente solicita como prueba, se indague a la Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sobre los hechos señalados en el recurso y sobre el compromiso que tiene el municipio para cumplir con la normatividad que rige el proceso de certificación objeto de estudio en este acto administrativo.

En primer lugar es necesario señalar que el artículo 79 del C.P.A.C.A., prevé el régimen jurídico aplicable a la solicitud y decreto de pruebas dentro del trámite de un recurso en sede administrativa, en los siguientes términos: " (.....) Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días.

Quando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio".

A su vez, el artículo 40 del C.P.A.C.A., contempla la potestad de las autoridades públicas de decretar pruebas de oficio o a petición de parte dentro de las diferentes actuaciones administrativas, así: **"Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos."** Negrilla fuera de texto.

El Consejo de Estado ha interpretado en el siguiente sentido las normas relativas a la práctica de pruebas en el curso de un procedimiento administrativo en los siguientes términos: **"De una parte, el hecho de que la autoridad niegue la práctica de una prueba, no implica per se desconocimiento del debido proceso y el derecho de defensa, pues no hay que olvidar que la conducencia y la eficacia de los medios probatorios son principios que informan la práctica de las pruebas. Como es sabido, la conducencia de la prueba, es la aptitud legal o jurídica que tiene esta, para convencer al fallador sobre el hecho a que se refiere. Este requisito, como lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, persigue un fin que apunta a la economía procesal, evitando que se entorpezca y dificulte la actividad probatoria con medios que de antemano se sabe no prestarán servicio alguno al proceso."** Negrilla fuera de texto.

Ahora bien, este despacho también considera pertinente acudir a la normativa vigente en materia probatoria para definir con claridad las características que las pruebas deben cumplir para ser decretadas, por lo cual resulta ineludible la remisión al Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, que establece lo siguiente: **"Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. "** (Negrilla fuera de texto)

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado ha analizado las propiedades que deben cumplir las pruebas para que las mismas sirvan al proceso, tal como lo describe en el extracto jurisprudencial que se cita a continuación: **"Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos**

1 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2010. Radicación No. 25000-23-25-000-2000-05721-01(2920-04). M.P. Dr Luis Rafael Vergara Quintero.

de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La **conducencia** consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La **pertinencia**, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La **utilidad**, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, **deben estar permitidas por la ley**.² (Negrilla fuera de texto)

Es así como de la normativa vigente, junto con la jurisprudencia del Consejo de Estado, es posible abstraer las siguientes conclusiones: (i) corresponde a la autoridad administrativa o judicial definir si la prueba solicitada satisface de los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, (ii) como resultado de ese juicio de valoración puede legítimamente resolver negar la práctica de las mismas, y (iii) dicha denegación no significa *per se* la violación del derecho fundamental al debido proceso.

En el recurso bajo revisión, esta superintendencia advierte que la solicitud de la prueba correspondiente a la indagación a la Viceministra de Agua potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sobre los hechos señalados en el recurso y sobre el compromiso que tiene el municipio de cumplir con los preceptos legales, no cumple con los requisitos de conducencia y utilidad para efectos de acreditar los criterios señalados en el artículo 5º del Decreto 1639 de 2013, puesto que:

- Para el cumplimiento de dichos criterios, la información solicitada debía ser reportada en el SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013, según lo señala el artículo 7 del Decreto 1639 de 2013, y la entidad no puede desconocer dicho plazo, puesto que, como norma de carácter procesal, debe ser acatada por los particulares y por la administración.
- La prueba solicitada no permite acreditar el cumplimiento de los criterios por los cuales la superintendencia resolvió descertificar al municipio de ARACATACA.
- Los criterios incumplidos solo podían ser acreditados mediante una tarifa probatoria³, puesto que el Decreto 1639 de 2013 establece la forma como los municipios y distritos podía obtener la certificación en la administración de SGP – APSB.

Adicionalmente, respecto del compromiso que tiene para cumplir los criterios incumplidos, se aclara al recurrente que para efectos del proceso de certificación antes mencionado, el artículo 7 del Decreto 1639 de 2013, estableció que todos los municipios y distritos tenían hasta el 30 de agosto de 2013 para acreditar la totalidad de los requisitos establecidos en el mencionado acto administrativo. Como quiera que los plazos señalados para el procedimiento de la certificación de municipios, no pueden ser modificados por esta superintendencia, en la medida que estos se encuentran definidos en el Decreto al que se ha venido haciendo referencia, no es posible acceder a ampliar el plazo invocado por el recurrente.

Como resultado del anterior análisis, la superintendencia deniega la práctica de la prueba solicitada.

4.2. Argumentos relacionados sobre el agotamiento del procedimiento señalado en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

Señala el recurrente que no reportó la información requerida por que asumió la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en diciembre de 2012, y realizó esfuerzos para tener la asesoría de la SSPD contactando a las mesas o personal de apoyo para guiar dicho cargue, aunque no existe evidencia de esto, en este momento están preparados para cumplir con este requisito.

En primer lugar, tal como lo afirma el recurrente, es conocimiento de esta superintendencia que el operador de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de ARACATACA era la empresa AGUAS REGIONAL MACONDO ARM S.A. E.S.P., que dejó de operar los servicios en el municipio, aunado a lo anterior, y para verificar la fecha en la cual el municipio inició la operación de estos servicios, en virtud de la competencia señalada en el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, dentro de los archivos documentales de esta entidad se encontró lo siguiente, en la visita de inspección administrativa realizada el 27 y 28 de noviembre de 2013, así:


2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia, Auto del 19 de agosto. Radicación 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093). MP Hugo Fernando Bastidas Becerra.

3 Sentencia T 594, del 28 de agosto de 2009. Tarifa probatoria "(...) es decir que ciertas circunstancias o hechos puedan ser probados a través de unos mecanismos expresamente señalados en la ley."


Conforme a lo manifestado por parte de la administración municipal de Aracataca, la Empresa Aguas Regional Macondo SA ESP venia prestando los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el casco urbano del municipio de Aracataca Magdalena, prestación que se llevo a cabo por parte de dicha empresa hasta el mes de julio de 2012, abandonando la prestación de los servicios sin previo aviso, razón por la cual no existió una entrega formal de la prestación al municipio de Aracataca.

Por los motivos anteriormente expuestos el municipio de Aracataca Magdalena mediante Decreto 074 del 17 de septiembre de 2012 se decreto en urgencia manifiesta con el fin de solventar dicha situación, no obstante el día 13 de noviembre del mismo año esta misma administración mediante Decreto 090 del 13 de noviembre de 2012 derogo definitivamente dicha urgencia. Es así como el municipio de Aracataca Magdalena inicio la operación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en su área urbana como prestador directo.

Como constancia de lo anterior fue suministrado copia de la primera factura emitida por el municipio de Aracataca, la cual acredita su prestación directa a partir del mes de noviembre de 2012.



MUNICIPIO DE ARACATACA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
NIT. 891.780.041-0



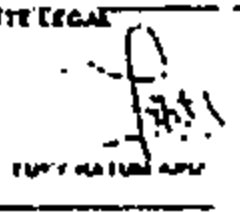
MUNICIPIO DE ARACATACA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
NIT. 891.780.041-0

FACTURA No.: 219

CODIGO: 35140

DIRECCION: K3 #13-55

PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE/2012

REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRES Y APELLIDOS: PEDRO SAENZ

USO: RESIDENCIAL

DIAS DE CONSUMO: 29

ESTRATO: BAJO

RUTA: 5

Esta Factura presta merito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 1427/95


IMPORTE TOTAL: \$ 8.523

FACTURA No.: 219

CODIGO: 35140

FECHA DE EMISION: ENE-22-2013

PERIODO DE CONSUMO: NOVIEMBRE/2012

REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRES Y APELLIDOS: PEDRO SAENZ

USO: RESIDENCIAL

DIAS DE CONSUMO: 29

ESTRATO: BAJO

RUTA: 5

Esta Factura presta merito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 1427/95

IMPORTE TOTAL: \$ 8.523

ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO	Vlr(M3)	TOTAL ACUEDUCTO
CARGO FIJO	3,784		3,784
CONSUMO BASICO	877	7	4,739
CONSUMO Suntuuario			
TOTAL CONSUMO			8,523
TOTAL ACUEDUCTO			8,523

ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	CONSUMO	Vlr(M3)	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO	0		0
CONSUMO BASICO	0	7	0
CONSUMO Suntuuario			
TOTAL CONSUMO			0
TOTAL ALCANTARILLADO			0

Descripción de Subsidio y Contribución

DESCRIPCION	SUBSIDIO	CONTRIBUCION
CARGO FIJO ACUEDUCTO	2,038	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	989	
BASICO ACUEDUCTO	2,555	
BASICO ALCANTARILLADO	1,810	
TOTAL CONSUMO M3'S		8,523

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	IMPORTE
FACTURAS VENCIDAS	0
RECONEXIONES	0
MULTAS Y SANCIONES	0
DEUDA CONGELADA	0
FINANCIACION(COMV) 0	0
TOTAL SERV. DOMICILIARIOS	8,523

CLIENTE

VIGILADO POR LA S.S.P. MUNI



EMPRESA

VIGILADO POR LA S.S.P. MUNI

PUNTO DE PAGO: Kra 4 NO. 8 - 38 CELULAR: No. 318 548 773

En consecuencia, queda claro que en noviembre de 2012, el municipio de ARACATACA inició la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Hecha la anterior aclaración, se considera pertinente señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 142 de 1994, para agotar el numeral 6.1, debe realizarse una invitación pública dirigida a las empresas de servicios públicos para que presenten ofertas para la prestación de acueducto y alcantarillado; de otra parte, el numeral 6.2 se agota, cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar los servicios en mención, se efectúa invitación a otros municipios, al departamento de Magdalena, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que la preste.

Sobre dicho procedimiento, la Oficina Asesora Jurídica de esta entidad, mediante el Concepto No. 703 de 2010, que:

“La invitación pública a la que hace referencia el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, tiene como propósito que, antes de que un Municipio decida prestar directamente uno o más servicios públicos domiciliarios, exhorte públicamente a las empresas de servicios públicos para que ofrezcan sus servicios a los habitantes de determinado municipio, o para que otros Municipios, el Departamento, la Nación y otras personas públicas o privadas organicen empresas para prestarlos, sin que ello implique la celebración de contrato alguno.
Recordemos que a partir de la Constitución Política de 1991, el régimen de los servicios públicos domiciliarios descansa sobre dos supuestos fundamentales, libertad de competencia y de elección del prestador del servicio, los cuales sólo pierden vigencia de manera temporal en virtud de la declaratoria de un área de servicio exclusivo.
Los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, corresponden a los casos o procedimientos previos que debe adelantar el municipio para que éste pueda prestar directamente el servicio, la cual es de carácter excepcional en la medida que está condicionada al agotamiento de la mencionada norma.
En ese mismo orden de ideas, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 333 y 365 de la Constitución Política los servicios públicos domiciliarios, como regla general, se prestan en régimen de competencia.

Así mismo, el artículo 22 de la Ley 142 de 1994 señala el principio de libertad de empresa, el cual consiste en permitir que las empresas debidamente constituidas y organizadas desarrollen su objeto social sin que sea necesaria la expedición de algún título habilitante por parte de las autoridades administrativas. Lo anterior, para efectos de garantizar la competencia, esto es, la no existencia de barreras legales o procedimientos administrativos que obstaculicen el ingreso de nuevos operadores al mercado.
De lo anterior, que el procedimiento establecido en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, es obligatorio cuando el municipio se constituye en prestador directo de los servicios públicos, en el entendido que dicho procedimiento lo habilita como tal.

Ahora bien, prestar directamente el servicio significa que el municipio con su propia infraestructura y presupuesto crea una unidad o dependencia para prestar el servicio, figura excepcional en el régimen de los servicios públicos, teniendo en cuenta que conforme lo dispone la Ley 142 de 1994 los servicios públicos se prestarán bajo el esquema de libertad de competencia.” Subrayado fuera de texto.

Al respecto esta superintendencia se permite recordar que el Decreto 1639 de 2013, estableció requisitos de carácter formal para acreditar el cumplimiento de los requisitos tendientes a la certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones, conforme a lo señalado en el artículo 7° de la citada disposición, la información requerida debía ser reportada al SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013.

Pues bien, partiendo de que la anterior es una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, “Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”, examinado el SUI se advierte que el municipio no reportó oportunamente el procedimiento señalado en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994, tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen:

Certificación SGP Prestadores Directos PDF															
Año				2013											
Departamento				MAGDALENA											
Municipio				ARACATACA											
CODIGO DANE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	EMPRESA	Invitación Artículo 6.1			Publicación Invitación 6.1			Constancia de no presentación Artículo 6.1			Invitación Artículo 6.2		
				ESTADO DE CARGUE	FECHA DE REPORTE	LINK DE LA INFORMACION REPORTADA	ESTADO DE CARGUE	FECHA DE REPORTE	LINK DE LA INFORMACION REPORTADA	ESTADO DE CARGUE	FECHA DE REPORTE	LINK DE LA INFORMACION REPORTADA	ESTADO DE CARGUE	FECHA DE REPORTE	LINK DE LA INFORMACION REPORTADA
47851	MAGDALENA	ARACATACA	ALCALDIA MAGDALENA-ARACATACA	Certificado	31/07/2014	INVITACION ACUEDUCTO L11.pdf	PENDIENTE	NO	NO	Certificado	31/07/2014	INVITACION.pdf	Pendiente	NO	INVITACION.pdf
47943	MAGDALENA	ARACATACA	ALCALDIA MAGDALENA-ARACATACA	Certificado	31/07/2014	INVITACION.pdf	PENDIENTE	NO	NO	Certificado	31/07/2014	INVITACION.pdf	Pendiente	NO	INVITACION.pdf

Sobre éste punto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así⁴: *"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas."*, además advierte que: *"(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo."* y concluye señalando: *"En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso."*

(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

Así las cosas, como sucedió en este caso, era indudable que al dejarse vencer el término señalado en el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013 para reportar la información en el SUI, la única decisión viable que podía tomar esta superintendencia consistía en descertificar al municipio de ARACATACA.

En efecto, el municipio es responsable por asumir la prestación directa de los servicios de acueducto y alcantarillado sin haber agotado previamente el procedimiento del artículo 6° de la Ley 142 de 1994. Además, para que los planteamientos esgrimidos por el recurrente fueran tenidos como eximente de responsabilidad, debían enmarcarse dentro de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, que están definidos por el Artículo 1° de la Ley 95 de 1890, en los siguientes términos: *"Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público"*.

Al respecto el tratadista Arturo Alessandri Rodriguez, en su obra *"De la responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil"*, Páginas 599 y 600, sobre el caso fortuito y la fuerza mayor señala:

"El caso fortuito o la fuerza mayor supone, (...), un acontecimiento imprevisto e irresistible. Es imprevisto, cuando no hay ninguna razón especial para creer en su realización e irresistible, cuando no es posible evitar sus consecuencias. El hecho debe ser imprevisto e irresistible en sí mismo, es decir, que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar habría podido preverlo. Se requiere una imposibilidad absoluta. Una simple dificultad o una imposibilidad relativa, personal del agente, no basta; la culpa se aprecia en abstracto. Un hecho que hubiera podido prever y evitar con mayor diligencia o a costas de un mayor esfuerzo o sacrificio no es caso fortuito; un hombre prudente lo habría previsto y evitado. Esto es suficiente para privarlo de ese carácter."

En reiterada jurisprudencia se ha estudiado lo referente al caso fortuito o fuerza mayor, de donde se destaca lo siguiente : *"Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1° de la ley 95 de 1890, los elementos integrantes del caso fortuito o fuerza mayor (...), deben ser concurrentes (imprevisibilidad e irresistibilidad) lo cual se traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal fenómeno, como tampoco se configura a pesar de ser irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de sus elementos elimina la estructuración de la fuerza mayor o caso fortuito."*

Si sólo puede calificarse como caso fortuito o fuerza mayor el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, no resulta propio elaborar un listado de los acontecimientos que constituyen tal fenómeno, ni de los que no lo constituyen. Por tal virtud, ha sostenido la doctrina nacional y foránea que un acontecimiento determinado no puede calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho".

De la jurisprudencia y la doctrina expuesta, podemos concluir que, en relación con la fuerza mayor o caso fortuito, se debe tener en cuenta:

- a) En cada caso concreto se debe analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho, para determinar si éste constituye o no fuerza mayor o caso fortuito.
- b) Los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser alegados y probados por quien los invoca. Es decir, la carga de la prueba la debe soportar quien invoca tales hechos y no quien debe valorarlos.

4 Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería

c) Debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes; esto es, que su previsión escape en condiciones normales a cualquier sujeto y no a una persona en particular, y que además de no haberse podido prever, sea imposible evitar que el hecho se presente.

d) No constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen frecuentemente o con cierta periodicidad, ni hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo dificulta el cumplimiento de una obligación, pero no la imposibilita.

e) Los hechos no deben ser atribuibles a la culpa, esto es, negligencia, descuido o impericia, de la persona que los invoca.

De acuerdo con lo anterior, se concluye, que los hechos que aduce el recurrente no se configura en hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes, pues es evidente que los mismos no hacían imposible el cumplimiento del criterio en mención, puesto que el municipio tuvo más de 8 meses para agotar el proceso en mención y reportarlo al SUI. Le recordamos al recurrente, que el acreditar los requisitos para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, es una obligación que corresponde al ente territorial como tal, y en este sentido, el municipio debió disponer los recursos para cumplir con ésta obligación legal y realizar los reportes de información al SUI en la oportunidad debida.

En cuanto a la afirmación del recurrente sobre la solicitud de apoyo por parte de esta entidad que buscó por varios medios, pero que no tiene soporte de ello, siendo los mismos meras afirmaciones sin sustento probatorio. Sobre el particular, es obligatorio tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 167 del Código de General del Proceso, que a la letra dice: "*Carga de la Prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (...)*"

En este sentido la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 27 de junio de 2007, proferida dentro del expediente 73319 3103 002 2001 00152, que contó con la ponencia del Dr. Edgardo Villamil Portilla, manifestó lo siguiente:

"A NADIE LE ES LÍCITO PRECONSTITUIR UNILATERALMENTE A SÍ MISMO LO QUE LE FAVORECE. No puede tomarse como prueba lo que las partes declaran en su favor. Las declaraciones de las partes alcanzan relevancia, sólo en la medida en que el declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario, o lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicación del principio conforme al cual a nadie le es lícito crearse su propia prueba." (Subrayado fuera de texto)

Por lo antes expuesto, el municipio de ARACATACA, no acreditó el cumplimiento del criterio relacionado con el agotamiento del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

4.3. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento de los requisitos relacionados con el reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas y, el 30% de la obligación de reportar tarifas aplicadas y la facturación al SUI.

Señala el recurrente que el municipio facturó únicamente el mes de diciembre de 2012, y funcionarios del MVCT le manifestaron que no había necesidad que la alcaldía adoptara las tarifas. El sistema de tarifas aplicado fue el de la empresa AGUAS RREGIONAL MACONDO.

Tal como se mencionó en el numeral anterior, el municipio de ARACATACA, fue prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado, y facturó los servicios desde noviembre de 2012, y no en diciembre como lo manifiesta el recurrente; en consecuencia debía reportar oportunamente al SUI el acto de aprobación de tarifas de dichos servicios, expedido con anterioridad al 30 de agosto de 2013, además de los formatos de facturación y tarifas aplicadas.

Se aclara al recurrente que en los artículos 6.3.3.2., 7.3.3.2. y 8.3.3.5. del Anexo de la Resolución Compilatoria No. 20101300048765, del 14 de diciembre de 2010 "*Por la cual se adiciona un artículo y se modifica el Anexo de la Resolución Compilatoria SSPD 20094000015085 del 11 de junio de 2009*", se encuentra la obligación de los prestadores de remitir a esta superintendencia a través de la página del SUI, en formato pdf o tif, copia del acto por medio del cual la entidad tarifaria local adopta el estudio de costos y tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Dicho reporte al SUI se debe realizar cada vez que la autoridad tarifaria local emita el acto de aprobación de tarifas, al día calendario siguiente a su expedición.

Así mismo, ésta obligación también se encuentra establecida, en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, sobre el proceso de certificación objeto de este acto administrativo, así: "*Los distritos y municipios están en la obligación de reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la información requerida.*"

Adicionalmente, el Decreto 1639 de 2013 estableció, respecto de este criterio que se cumplía reportando al SUI *“del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema.”*, es decir, que el alcalde municipal de ARACATACA, a pesar de que inició operaciones en noviembre de 2012, tuvo más de 8 meses para realizar el estudio de costos y tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado y, adoptar sus resultados mediante acto administrativo, y para reportar dicho acto administrativo en el SUI antes del 30 de agosto de 2013.

Así mismo, revisado el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS, se encontró que la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARACATACA, se inscribió hasta el 20 de agosto de 2014, así:

# SOL	ID ESP	EMPRESA	MOTIVO	ESTADO	Nº RAD	FECHA RADICACION	
		A V	A V	A V	A V	A V	
1	321932	22248	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARACATACA	INSCRIPCION	PENDIENTE DE REVISION	2014822248321932	20/08/2014 12:23:49

Se advierte que una vez esta entidad aprueba un trámite en RUPS, procede a habilitar los formatos y formularios pertinentes en el SUI, de acuerdo a la información que el prestador señaló al momento de solicitar la inscripción o la actualización antes mencionadas.

Es necesario aclararle al recurrente que el trámite de aprobación o rechazo de las solicitudes realizadas en el RUPS, debe observar lo establecido en la Resolución Compilatoria No. SSPD 20101300048765 de 2010, modificada por la Resolución No. SSPD 20111300017605 de 2011, así:

“Artículo 1.1.1.9 APROBACIÓN O NO APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN O CANCELACIÓN

Una vez los prestadores alleguen la documentación soporte en los términos de los artículos 1.1.1.7 y 1.1.1.8 del presente anexo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuenta con treinta (30) días hábiles para comunicar al prestador la devolución, aprobación o no aprobación de la solicitud de inscripción, actualización o cancelación, decisión que se comunicará por cualquier medio eficaz.

Parágrafo 1o. Se entiende perfeccionado el trámite de inscripción, actualización o cancelación del registro cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios comunique al prestador la aprobación o no aprobación de la solicitud respectiva.”

Así las cosas, era indudable que si el alcalde municipal no expidió el acto de aprobación de tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado, y no realizó oportunamente la inscripción en el RUPS para contar con los formatos habilitados en el SUI, en los que debía acreditar el cumplimiento de los criterios en mención, y al dejarse vencer el término señalado en el artículo 7° del Decreto 1639 de 2013 para reportar ésta información en el SUI, la única decisión viable que podía tomar esta superintendencia consistía en descertificar al municipio de ARACATACA.

Dado que la norma es clara en señalarle al alcalde el deber de asumir unas cargas procesales, que si no cumple con ellas, le es aplicable la consecuencia procesal que el ordenamiento jurídico prevé para tales casos, esto es, la prevista en el artículo 5° de la Ley 1176 de 2007, reglamentado por el Decreto 1484 de 2014, según la cual si la entidad territorial que es sujeto del proceso de certificación, no expidió los actos administrativos solicitados y por ello no reportó la información señalada en el Decreto 1639 de 2013, debe entenderse que pierde la administración de los recursos del SGP-APSB y la competencia para asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, puesto que es evidente el incumplimiento de los criterios en mención.

4.4. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el reporte al SUI del acta de concertación de puntos y lugares de muestreo o de la carta dirigida a la autoridad sanitaria competente para concertar éstos puntos.

El recurrente afirma que este tema fue manejado por el PDA, el cual les enviaba un formato pero no recibían el retorno, por ello creyeron que esta obligación era reportada por el PDA.

Al respecto, el artículo 5° de la Resolución No. 811 de 2008, expedida por los ministerios de Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Salud y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, respectivamente, señaló: *“La persona prestadora y la autoridad sanitaria competente en un término de 45 días hábiles a la fecha de publicación de esta Resolución debe concertar los puntos y lugares de muestreo de la calidad del agua.”*

Así mismo, el Anexo de la Resolución Compilatoria No. 20101300048765, del 14 de diciembre de 2010 *“Por la cual se adiciona un artículo y se modifica el Anexo de la Resolución Compilatoria SSPD 20094000015085 del 11 de junio de 2009”*, señala que los prestadores del servicio público de acueducto

que realicen la actividad de distribución, deberán reportar al Sistema Único de Información, dentro del tópico técnico, los resultados de las características analizadas en ejercicio del control a la calidad del agua según lo establecido en el Decreto 1575 de 2007, la Resolución 2115 de 2007, la Resolución 811 de 2008 y demás resoluciones complementarias, expedidas por el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo a la población atendida por persona prestadora por municipio.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el artículo 9º del Código Civil, según el cual *"La ignorancia de las leyes no sirve de excusa"*, así como del artículo 56 de la Ley 4 de 1913 (Código de Régimen Político) que en idéntico sentido ad litteram establece que *"(...)No podrá alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla (...)"*, no es de recibo la afirmación que hace el recurrente, para no haber cumplido éste criterio.

Por ello, se reitera lo señalado anteriormente en cuanto al tiempo con el que contaba el alcalde municipal para cumplir con las obligaciones en materia de servicios públicos, en particular, para concertar los puntos y lugares de muestreo. Adicionalmente, si el tiempo era tan corto para que el alcalde municipal y la autoridad sanitaria competente concertaran los puntos y lugares de muestreo, se le recuerda al recurrente, que el Decreto 1639 de 2013, señaló que en caso de no contar con el documento que contenga dicha concertación, el municipio podría acreditar éste criterio reportando al SUI *"la solicitud suscrita por el municipio prestador directo y radicada ante la autoridad sanitaria competente, que contenga la propuesta para la concertación de los lugares y puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en la red de distribución, antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados."*

En consecuencia, dado que el municipio de ARACATACA, no reportó el acta de concertación de puntos y lugares de muestreo suscrita entre la Secretaría de Salud Departamental y la Alcaldía de Aracataca ni la carta de Intención Puntos de Muestreo – PDF, no es posible tener como acreditado el cumplimiento del criterio objeto de estudio.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento de los criterios que se le demandan, y por lo tanto el recurso formulado por el señor JAIRO DE JESÚS MEJÍA CUELLO, como apoderado especial del alcalde municipal de ARACATACA, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20144010017855, del 29 de mayo de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al apoderado del municipio de ARACATACA, del departamento del MAGDALENA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento del MAGDALENA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.


JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información

Visto Bueno: Martha Lucía Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 20094014798080714A